

RUMANIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

Menos de dos meses después de haberse instalado, el Gobierno rumano, que se ha enfrentado a un gran problema de imagen en el contexto de la tentativa fracasada de cambiar los Códigos Penales, ha pasado por su primer reajuste. Obligado de todas formas por la coyuntura a efectuar un pequeño reajuste, después de que el ministro para el Ámbito Empresarial, Florin Jianu, y el de Justicia, Florin Iordache, presentaran su dimisión, el jefe del Ejecutivo, Sorin Grindeanu, ha sustituido a otros dos ministros, de Economía y de Fondos Europeos.

Los cuatro nuevos ministros son Tudorel Toader, de Justicia; Mihai Tudose, de Economía; Rovana Plumb, de Fondos Europeos; y Alexandru Petrescu, trasladado del Ministerio de Economía al Ministerio para el Ámbito Empresarial.

Los mandatarios han pronunciado su juramento de investidura en presencia del jefe del Estado, Klaus Iohannis, quien ha expresado su esperanza de que los nuevos ministros aumenten el valor del gabinete de Grindeanu.

Sin duda alguna, la misión más complicada la tiene el ministro de Justicia, Tudorel Toader, quien debe hacer olvidar la prestación profesional de su predecesor, Florin Iordache, autor del texto de la célebre ordenanza de gobierno número 13, aprobada el 31 de enero y el factor que provocó las protestas más amplias de la historia poscomunista de Rumanía. Personaje apolítico, con una amplia experiencia en el sector judicial y con una reputación como tal, Toader fue alabado incluso por la persona considerada el autor moral de la derogada ordenanza 13, el líder del PSD (el principal partido en el Gobierno), Liviu Dragnea: «Los argumentos del primer ministro son los mismos que yo también habría tenido en cuenta. Es decir una postura profesional indiscutible, el hecho de ser un buen constitucionalista, un especialista en Derecho y el hecho de ser miembro de la Comisión de Venecia. No se ha pedido y no se le pedirá al señor Tudorel Toader que entre en el partido».

Inmediatamente después de pronunciar el juramento, el primer ministro Grindeanu ha presentado a los demás ministros los deberes de su inicio de mandato. El primer ministro ha pedido al Ministro de Economía que revitalice la industria de Defensa. «Tenemos un presupuesto del 2% para la Defensa», ha afirmado Grindeanu. «Desearía que gran parte de esta cantidad se gaste en Rumanía, de tal manera que podamos ayudar a la industria nacional de Defensa».

Sorin Grindeanu desea que el ministro del Ámbito Empresarial continúe el proyecto de la ley de prevención, que se centraría en evitar las sanciones aplicadas a las compañías por violar algunas normas legales, a la vez con solucionar los problemas descubiertos, mientras que la nueva ministra de

Fondos Europeos tiene como principal misión la de atraer este año unos 5.200 millones de euros, como objetivo asumido por el Gobierno.

El riesgo de cualquier efecto peligroso de la ordenanza con la que el Gobierno rumano intentó modificar el Código Penal se ha eliminado, una vez rechazada en el Legislativo. Iniciada el 31 de enero, la historia de la célebre ordenanza de urgencia 13 que relajaba de manera discutible la legislación penal y favorecía así a las personas acusadas de corrupción, ha acabado exactamente tres semanas después de adoptarse. Los diputados de todos los colores políticos han votado este martes a favor de rechazarla y han aprobado inmediatamente la ordenanza 14, que derogaba a la primera. La derogación se hizo en el contexto de las amplias protestas antigubernamentales que comenzaron el 31 de enero y que no han acabado todavía. La ordenanza 13 fue un error que ha afectado gravemente a la credibilidad del país, ha acusado nuevamente la jefa del PNL, Raluca Turcan. Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía (UDMR), Attila Korodi, ha llamado la atención sobre la necesidad de modificar la legislación penal para cumplir la Constitución, pero ha destacado que esto no se puede hacer mediante ordenanzas de gobierno.

El representante de la USR, Dan Barna, opina que sin embargo ha quedado algo positivo de esta historia: «Si hay que encontrar algo positivo en el abuso de derecho que pasó el 31 de enero, esto es que ha traído el derecho a la sociedad más que cualquier debate sobre la Constitución o sobre otra ley hasta ahora en Rumanía. Los ciudadanos de todos los niveles hablan sobre las ordenanzas, lo que es al fin y al cabo un elemento positivo».

Por parte del Gobierno, la socialdemócrata Ana Birchall ha declarado que espera que los futuros debates sobre la legislación penal no permitan que la Justicia sea empleada políticamente. Ana Birchall ha sido la interina en la dirección del Ministerio de Justicia, sustituyendo a Florin Iordache, quien promovió la criticada ordenanza 13 y presentó su dimisión unos días después de ser derogada.

La coalición formada por el PSD y la ALDE, que gobierna en Rumanía después de las elecciones de diciembre, continuará la lucha contra la corrupción, mientras que las modificaciones del Código Penal, necesarias para ponerlo en plena concordancia con las decisiones del Tribunal Constitucional, se harán solo en el Parlamento. El primer ministro Sorin Grindeanu ha prometido esto en la reunión de Bruselas con el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Los debates para aclarar la situación habían llegado a ser obligatorios después de que la Comisión Europea criticara el intento del gabinete de Grindeanu de modificar mediante ordenanza de urgencia la legislación penal, relajándola respecto al delito de abuso de poder y alimentando la sospecha de que la medida habría ayudado a los políticos con problemas con la ley. El mandatario europeo ha manifestado su agrado por la derogación de la criticada ordenanza, vista como una vuelta al camino normal de la lucha contra la corrupción. Un recorrido que tiene como punto final la eliminación del Mecanismo de Cooperación y Verificación en el sector de la

Justicia, instituido por los colaboradores europeos tras la adhesión del país a la UE. Está bien, ha destacado Frans Timmermans, que el Gobierno quiera poner en concordancia la legislación nacional con las normas de la Unión Europea y corregir lo que el Tribunal Constitucional de Bucarest considera confuso o ilegal, solo que ésto se tiene que hacer con total apertura y transparencia. Así serán las cosas, ha asegurado el primer ministro Sorin Grindeanu.

Y para dar credibilidad a las futuras decisiones del gabinete, Sorin Grindeanu ha tomado en cuenta la nominación en la dirección del Ministerio de Justicia de una persona apolítica. Ésta sustituiría al socialdemócrata Florin Iordache, que se vio obligado a presentar su dimisión unos días después de que se derogara la ordenanza de urgencia que provocó una tormenta en el escenario político. Por otro lado, la calle no se contenta solo con el sacrificio de Iordache y ha pedido la dimisión de todo el gabinete, afectado por un gran déficit de confianza tras el episodio de la ordenanza. Un episodio que el PSD desearía que se olvidara cuanto antes. En el Parlamento, el presidente del partido y de la Cámara de los Diputados, Liviu Dragnea, a su vez duramente criticado, ha anunciado que los parlamentarios de la mayoría votarán una ley para rechazar la ordenanza 13, para no dar lugar más a interpretaciones. Cabe recordar que la ordenanza 13 se derogó mediante otra, que está en vías de aprobación en el legislativo, pero hay voces que sostienen que el rechazo de la primera es obligatoria para eliminar sus efectos.

Situación económica

Realizados como una radiografía general sobre los países miembros, los informes semestrales de la Comisión Europea analizan los progresos o los retrasos registrados en sectores clave, como la economía, las políticas sociales, la educación o la justicia. Las evaluaciones indican que en la mayoría de los países miembros la recuperación económica ha contribuido a la reducción de la tasa del paro, aunque se han mantenido algunos niveles registrados antes de la crisis.

En el caso de Rumanía, que el pasado 1 de enero celebró 10 años de su integración a la UE, el informe ha valorado positivamente la situación económica y las políticas sociales, pero ha expresado preocupación ante una posible superación del déficit estimado en un 3% del PIB, así como ante el riesgo de anular los progresos registrados en la lucha contra la corrupción. La estabilidad financiera mejoró en 2016, el sistema bancario fue bien capitalizado y la liquidez se mantuvo en un nivel confortable. Según el informe presentado por el Ejecutivo comunitario, en los últimos 2 años, en Rumanía se ha registrado un crecimiento económico sostenible, que en 2016 alcanzó un nivel máximo del 4,9%. Las reducciones significativas de tasas han hecho que el año pasado el déficit presupuestario aumentara al 2,8% del PIB. Las estimaciones indican que en 2017 el déficit superará el 3,6% y en 2018, el 3,9%, respectivamente. Además, se ha consolidado el mercado laboral, los salarios han aumentado y la tasa del paro ha bajado.

El nivel de pobreza, uno de los peores de la UE, se ha reducido, pero se ha mantenido la injusticia social, sobre todo entre los jóvenes, las familias con muchos niños, las personas discapacitadas y la población gitana o del entorno rural. En cuanto a la salud, aunque en 2016 se aprobaron algunas medidas nuevas, el sistema todavía es ineficiente y corrupto y el acceso a los servicios médicos es limitado, sobre todo en las aldeas. En el ámbito de la educación, el informe destaca las medidas insuficientes que se han tomado para la prevención del abandono escolar y el acceso limitado a la enseñanza superior para los jóvenes del entorno rural. En 2016 también se registró un avance de las reformas destinadas a la administración pública, pero los expertos comunitarios lo consideran insuficiente. La corrupción, según indica el informe, se ha mantenido en todos los niveles y sigue siendo un impedimento para el ámbito empresarial. Aunque en los últimos años Rumanía ha emprendido muchos esfuerzos para eliminar este azote, ahora todos sus progresos podrían verse anulados, ha advertido Bruselas y ha puesto como ejemplo las ordenanzas de urgencia recientemente aprobadas por el nuevo Gobierno formado por el PSD y la ALDE para modificar la legislación penal. El polémico decreto fue considerado un intento del Gobierno de indultar los delitos cometidos por algunos personajes influyentes de la política y la administración central y local. La ordenanza fue derogada, pero solo tras las advertencias enviadas por los socios occidentales, las críticas presentadas por la oposición y los medios de comunicación y sobre todo tras las amplias manifestaciones de protesta de cientos de miles de rumanos que salieron a la calle en Bucarest y en otras ciudades del país y del extranjero.

Situación social

Una reciente reunión de la Asociación de los Municipios de Rumanía organizada en Bucarest ha representado una oportunidad para pasar revista a los problemas que tienen las comunidades locales.

En Rumanía, el programa nacional de desarrollo tiene este año fondos de 30.000 millones de lei, y el Gobierno espera que sea operativo a partir del segundo semestre. Es el anuncio de la viceprimera ministra Sevil Shhaideh, quien ha precisado que los alcaldes tienen 30 días para presentar proyectos de infraestructura.

«Tenemos que ofrecer a los jóvenes y a las personas la misma oportunidad en la vida, indiferentemente del lugar donde nacen», ha sido el mensaje del primer ministro Sorin Grindeanu para los alcaldes de los municipios reunidos este lunes en Bucarest. Centrando su discurso en el tema de las “dos Rumanías”, el primer ministro ha insistido en las grandes diferencias entre los rumanos del medio urbano y los del medio rural. «Un 47% de la población de Rumanía sigue viviendo en el medio rural. Casi un 80% del territorio está administrado por ustedes, los municipios. Han cambiado muchas cosas, pero muchas veces todavía parece que tenemos dos Rumanías: una Rumanía urbana y una Rumanía rural. Las diferencias entre los medios rural y urbano son cada vez mayores», ha afirmado el primer ministro.

«Mientras dependa de mi pluma asignar dinero para las comunidades locales, lo haré sin ningún tipo de vacilación. Por lo tanto, no solo pueden contar conmigo, sino también todos los que estamos aquí somos un equipo unido que entiende muy bien el desarrollo, la necesidad del desarrollo de este país y de la zona rural», ha declarado por otro lado, en la misma reunión, Călin Popescu Tăriceanu, presidente del Senado y copresidente de ALDE, colaborador del PSD en el Gobierno.

Tăriceanu ha lanzado en esta ocasión la idea de crear un segundo banco público, además de la CEC (Caja de Ahorros), que tenga como principal objetivo la financiación de los proyectos de las comunidades locales. Porque, según ha afirmado el mandatario, no todas las localidades tienen suficientes recursos para implicarse en proyectos importantes para su comunidad y la gente desea vivir mejor hoy y mañana, no dentro de 20 o 40 años. Por esto hace falta hacer un esfuerzo de desarrollo, para crear proyectos que cambien cuanto antes su calidad de vida.

Los alcaldes que han ido a Bucarest también han recibido promesas por parte del líder del PSD, Liviu Dragnea. Es decir promesas de que tendrán mayores sueldos una vez entrada en vigor la ley única de salarios. Y también de que recibirán sobresueldos para la absorción de fondos europeos y de que se aclarará la legislación para que los alcaldes sepan lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, para no estar en el candelerero de la DNA. La administración pública tiene que salir de «este estado de parálisis, con funcionarios que tienen miedo de firmar», ha afirmado Liviu Dragnea, y por esto, ha explicado, la diferencia entre la legalidad y la oportunidad se definirá en el Parlamento.